

Señor(a)

JUEZ(A) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUGA – REPARTO -

E.

S.

D.

REFERENCIA: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

ACCIONANTE: LEILA FABIOLA GUEVARA

DEMANDADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

YOJANIER GÓMEZ MESA, mayor de edad, vecino y residente en la ciudad de Cali (V), identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.696.932 de Neiva (H), portador de la Tarjeta Profesional No. 187.379 del C. S. de la J., actuando en mi condición de apoderado judicial de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.867.361 de Tuluá (V), respetuosamente me dirijo a S.S., con la finalidad de instaurar **DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, representada legalmente por su Presidente **MAURICIO OLIVERA GONZALEZ**, o quien haga sus veces al momento de la notificación y traslado de la demanda, para que previo el trámite ordinario previsto para este medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA, con citación y audiencia del Señor Agente del Ministerio Público y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se sirva Su Señoría acceder a las pretensiones que más adelante indicaré con base en las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico:

I. DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

Son partes en el presente proceso:

PARTE DEMANDADA: **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Trabajo de conformidad con el Decreto 2011 de 2012, representada legalmente por el Doctor **MAURICIO OLIVERA GONZALEZ**, o por quien(es) hagan sus veces al momento de la notificación de este medio de control, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá D.C.

PARTE DEMANDANTE: La señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 29.867.361 de Tuluá (V); perjudicada directa, con domicilio en la Ciudad de Cali (V) tal como se indica en el acápite de las notificaciones y quien para efectos de este medio de control se encuentra representada judicialmente por el suscrito.

Igualmente la conforma el Señor(a) Procurador(a) Judicial Administrativo delegado para estos asuntos y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Plaza de Cayzedo Cra. 4 No. 11-33, Edificio Ulpiano Lloreda Oficina 801-802, Teléfono: 882 5920 Celular: 315 791 1569 - 300 811 5452

www.pensionescali.com

Cali - Valle

II. PRETENSIONES

1. Que se declare la **NULIDAD** del Acto Administrativo contenido en la **Resolución No. 006881 del 09 de Julio de 2003**, por medio de la cual el extinto **INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL SECCIONAL VALLE**, reconoció una pensión de vejez a favor de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**, a partir del 1° de Agosto de 2003 en cuantía equivalente a \$804.346, aplicando previsiones de La Ley 33 de 1985 y Ley 100 de 1993.
2. Que se declare la **NULIDAD** del Acto Administrativo contenido en la **Resolución No. 013321 del 17 de Noviembre de 2004**, por medio de la cual el extinto **INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL SECCIONAL VALLE**, resolvió modificar la resolución No. 006881 del 09 de Julio de 2003 en el sentido de que la Pensión de Vejez reconocida a favor de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA** se reconocería partir del 1° de Diciembre de 2004 en cuantía de \$936.159.
3. Que se declare la **NULIDAD** del Acto Administrativo contenido en la **Resolución No. 08910 del 20 de Junio de 2005**, por medio de la cual el extinto **INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL SECCIONAL VALLE**, resolvió un recurso de reposición y modificó la resolución No. 006881 del 09 de Julio de 2003 y la Resolución No. 013321 del 17 de Noviembre de 2004, para en su lugar conceder la Pensión de Vejez a favor de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA** a partir del 1° de Julio de 2005 en cuantía de: \$998.430, aplicando el régimen contenido en la Ley 100 de 1993.
4. Que se declare la **NULIDAD** del Acto Administrativo contenido en la **Resolución No. 901270 del 19 de Octubre de 2005**, por medio de la cual el Gerente del extinto **INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL SECCIONAL VALLE**, resolvió un recurso de apelación y Modificó las resoluciones No. 013321 de fecha 17 de Noviembre de 2004 y 08910 del 20 de Junio de 2005, en el sentido de otorgar la misma prestación a favor de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**, a partir del 1° de Julio de 2005 y en cuantía equivalente a \$1.042.452, basándose en 1904 semanas cotizadas, un IBL de : \$1.226.414 y un momento de 85%, bajo las previsiones de la Ley 100 de 1993.
5. Que se declare la **NULIDAD** del Acto Administrativo contenido en la **Resolución No. GNR 275018 del 08 de Septiembre de 2015**, por medio de la cual **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** resolvió una solicitud de reliquidación de la pensión de vejez a favor de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA** con base en la Ley 33 de 1985 y la reliquidó bajo el imperio del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, a partir del 12 de Marzo de 2012.
6. Que se declare la **NULIDAD** del Acto Administrativo contenido en la **Resolución No. VPB 73414 07 de Diciembre de 2015**, por medio de la cual **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, resolvió un recurso de apelación y decidió confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución GNR 275018 del 08 de septiembre de 2015.

7. Que como consecuencia de las anteriores, declaratorias de **NULIDAD** de Los Actos Administrativos acusados y a título de **RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, se **CONDENE** a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, a **RECONOCER, LIQUIDAR Y PAGAR LA RELIQUIDACIÓN** de la Pensión de Vejez que viene percibiendo la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**, en los términos previstos en el **Artículo 1° de la Ley 33 de 1985, es decir con un monto del 75% sobre un Ingreso Base de Liquidación constituido con el promedio de la totalidad de los factores salariales realmente devengados en el último año de servicios.**
8. Se **CONDENE** a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** - a **RECONOCER Y PAGAR** a favor de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA** la **RELIQUIDACIÓN** de la Pensión de vejez que percibe, conforme al marco jurídico prestacional que le es aplicable y teniendo en cuenta para ello el promedio de la totalidad de los factores salariales realmente devengados en el último año de servicios, **lapso comprendido entre el 1° de Julio de 2004 y el 30 de Junio de 2005**; lo anterior al tenor de lo establecido en el Artículo 1° de la Ley 33 de 1985 en concordancia con la Sentencia de Unificación del **CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SALA PLENA, Radicación 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09) de 4 de Agosto de 2010. M.P. VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA** y Sentencia de Unificación del **CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, Consejero ponente: DR. GERARDO ARENAS MONSALVE, del veinticinco (25) de febrero de dos mil dieciséis (2016), Expediente: 25000234200020130154101, Referencia: 4683-2013,** con efectos fiscales a partir del 1° de Julio de 2005.
9. Se **CONDENE** a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** a **RECONOCER Y PAGAR** a favor de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**, de acuerdo a la normatividad y en los términos mencionados, la diferencia pensional existente entre la prestación inicialmente reconocida y la que a través de esta Acción se solicita, retroactivamente a partir del 1° de Julio de 2005 y hasta que se incluya en nómina el valor reliquidado de la prestación y las diferencias dejadas de percibir, conforme a la sentencia condenatoria emitida por Su Señoría.
10. Se **CONDENE** a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** - **A PAGAR** en forma actualizada la correspondiente indexación de las sumas adeudadas, de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor certificados por el DANE, desde el momento en que el derecho se hizo exigible, es decir 1° de Julio de 2005 y hasta que se haga efectivo el pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del C.P.A.C.A.
11. Para el cumplimiento de la sentencia, **ORDENESE** dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.
12. **CONDENAR** en costas y agencias en derecho a la Entidad demandada, de conformidad con el artículo 188 del CPACA.

- 13.** Sirvase reconocermé personería para actuar como apoderado de la parte actora en el presente proceso de acuerdo a los términos y para los fines del poder conferido.

III. HECHOS Y OMISIONES

- 1.** Mi poderdante, la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA** nació el día 16 de Mayo de 1944, contando a la fecha de presentación de esta demanda con 72 años de edad.
- 2.** Que por medio de **Resolución No. 006881 del 09 de Julio de 2003**, el extinto **INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL VALLE**, reconoció una pensión de vejez a favor de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 29.867.361 de Tuluá (V), con base en la Ley 33 de 1985 y Ley 100 de 1993, a partir del 1° de Agosto de 2003 y en cuantía de: \$804.346.
- 3.** Que la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**, el día 29 de Julio de 2004, solicitó la reactivación del estudio de su Pensión de Vejez, manifestando que no obstante el reconcomiendo por parte del ISS, continuó laborando para la DIAN de Tuluá, razón por la cual no cobró ninguna mesada pensional y requería de la reliquidación de su Pensión de vejez para retirarse del servicio.
- 4.** Que a través de **Resolución No. 013321 del 17 de Noviembre de 2004**, el extinto **INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL**, resolvió modificar la Resolución No. 006881 del 09 de Julio de 2003 en el sentido de reconocer la misma a favor de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**, a partir de del 1° de Noviembre de 2004 en cuantía de \$936.159, aplicando el régimen contenido en la Ley 100 de 1993.
- 5.** Que la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**, inconforme con la decisión presentó Recurso de reposición para que se le aplicara el régimen contenido en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año y en consecuente se aplicara una tasa de remplazo del 90%.
- 6.** Que por medio de **Resolución No. 08910 del 20 de Junio de 2005**, el **INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL SECCIONAL VALLE**, resolvió el recurso de reposición y Modificó la Resolución No. 006881 del 09 de Julio de 2003 y la Resolución No. 013321 del 17 de Noviembre de 2004, en el sentido de reconocer la pensión de vejez a la Señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**, a partir del 1° de Julio de 2005 por un valor de \$998.430, teniendo en cuenta los parámetros de la Ley 100 de 1993, un IBL de: \$1.174.623 al que le aplico el 85%.
- 7.** Por medio de **Resolución No. 901270 del 19 de octubre de 2005** La Gerente Seccional del **ISS VALLE DEL CAUCA**, resolvió recurso de apelación en el que modificó nuevamente las Resoluciones No. 013321 del 17 de Noviembre de 2004 y 08910 del 20 de Junio de 2005, para otorgar la misma Pensión de Vejez a la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**, a partir del 1° de Julio de 2005 con base en

1904 semanas cotizadas, un IBL de: \$1.226.414 y un porcentaje del 85% para una prestación inicial de: \$1.042.452 bajo los parámetros de los artículos 21, 33 y 34 de la Ley 100 de 1993.

8. El 12 de Marzo de 2015, la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**, a través del suscrito, radicó en **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, Solicitud de Reliquidación de la Pensión de Vejez, con la finalidad de que se aplicará en su integridad el régimen de transición del que es beneficiaria contenido en el marco legal descrito en la Ley 33 de 1985.

9. **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, se pronunció mediante **Resolución No. GNR 275018 del 08 de septiembre de 2015**, en la que concluyó que la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**, tenía derecho a que su pensión de vejez se reliquidara con base en el monto del 90% establecido en el Decreto 758 de 1990 por ser más favorable, para una prestación de \$1.555.167 efectivas a partir del 12 de marzo de 2012, en lo demás aplicó Ley 100 de 1993.

10. El día 1° de Octubre de 2015, se radicó ante **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, recurso de apelación en contra de la Resolución No. GNR 275018 del 08 de septiembre de 2015, reiterando que el régimen más favorable para la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**, es la Ley 33 de 1985 que no el Decreto 758 de 1990, razón por la cual se debía aplicar en su integridad el régimen especial de los servidores públicos.

11. Que por medio de **Resolución No. VPB 73414 del 07 de Diciembre de 2015**, **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, desató el recurso de apelación y resolvió confirmar la Resolución No. GNR 275018 del 08 de septiembre de 2015, basándose fundamentalmente en que de acuerdo a sus directrices internas y en virtud de las Sentencias C-258 de 2013 y SU -230 de 2015, no es posible liquidar la pensión de vejez de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA** con base en el último año de servicios y todos los factores salariales, pues el régimen de transición no recae sobre el IBL.

12. La señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**, es beneficiaria del Régimen de Transición¹, pues en su caso particular, para la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, 1° de abril de 1994², contaba con más de treinta y cinco (35) años de edad y 15 años de servicio cotizados.

¹ Inciso segundo de artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

² ARTICULO. 151.-Vigencia del sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones previsto en la presente ley, regirá a partir del 1° de abril de 1994. No obstante, el gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras de los fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones contempladas en la presente ley, a partir de la vigencia de la misma.

PARAGRAFO. -El sistema general de pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental.

13. Que la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**, laboró para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales **DIAN** desde el 02 de Enero de 1984 hasta el 30 de Junio de 2005, durante 1.105 semanas para un total de **21 años, 05 meses y 29 días**.
14. Mediante Resolución 04112 del 25 de Mayo de 2005 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales **DIAN**, resuelve Retirar del Servicio a la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA** identificada con cédula de ciudadanía 29.867.361, a partir del 1º de Julio de 2005.
15. El último cargo público que desempeñó la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA** fue de: **Técnico en Ingresos Públicos IV Nivel 28 Grado 17**, ubicado en la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Tuluá de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, tal como consta en la Resolución No. 04112 del 25 de Mayo de 2005 que la retiro del servicio.
16. Que el status pensional de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA** lo adquirió para el 02 de enero de 2004, fecha para la cual completó los 20 años de servicio público y 55 años de edad.
17. Que, de acuerdo al Certificado de Factores Salariales del Último Año de servicio suministrado por la Jefe de División de Gestión Administrativa y Financiera **VICTORIA EUGENIA OVIEDO ARIAS** de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales **DIAN**, expedida el 21 de Enero de 2015, la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA** devengó los siguientes emolumentos constitutivos de salario entre el **1º de Julio de 2004 y el 30 de Junio de 2005**:

FACTORES SALARIALES	1º de Julio de 2004 - 31 de Diciembre de 2004	1º de Enero de 2005 al 30 de Junio de 2005	TOTAL
ASIGNACIÓN BÁSICA	\$7.510.007	\$7.551.172	\$15.061.179
PRIMA DE VACACIONES	\$639.433		\$639.433
FACTOR SAL. VACACIONES	\$63.029		\$63.029
F. GRUPAL	\$3.168.661	\$3.121.151	\$6.289.812
FACTOR NACIONAL	\$1.277.288	\$1.321.455	\$2.598.743
PRIMA DE SERVICIOS	\$613.856		\$613.856
PRIMA DE NAVIDAD	\$1.332.152		\$1.332.152
BONIFICACIÓN SERVICIOS	\$20.562	\$440.485	\$461.047
SUMATORIA DEVENGADO ULTIMO AÑO			\$27.059.251

18. El Ingreso Base de Liquidación de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**, de acuerdo al último año de servicio prestado y tomando como base todos los factores salariales devengados, asciende a: **DOS MILLONES DOSCIENTOS**

CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$2.254.937,00).

19. Que el valor real de la Pensión de Vejez aplicándole un monto del 75%³ sobre el IBL arriba citado asciende a una prestación inicial para el 1° de Julio de 2005 de: **UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE (\$1.691.203).**

20. La señora **LEILA FABIOLA GUEVARA** me ha conferido **PODER ESPECIAL, AMPLIO y SUFICIENTE** para actuar en su representación en el presente trámite judicial.

IV. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Son fundamentos Constitucionales:

➤ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

"ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan."

Con su consagración constitucional en el artículo 13 de la Carta Política de 1991, se trascendió de la igualdad formal a la igualdad material, que sin desconocer aquella, propendió por un trato igual bajo los mismos supuestos fácticos. Para el caso en particular, se tiene que, cuando se trata de servidores públicos en régimen de transición, en virtud del principio de igualdad, deben aplicarse en su integridad el régimen que consagra la Ley 33 de 1985, por haber sido resueltos bajo ese imperio legislativo las situaciones fácticas similares.

"ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la Ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.
La Ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante."

Bajo tal derrotero es abundante la jurisprudencia de la Corte Constitucional que se ha ocupado de establecer el alcance de la seguridad social como bien jurídico objeto de

³ Monto estipulado por la Ley 33 de 1985 artículo 1°.

protección en nuestro ordenamiento⁴. Así, en el texto constitucional se observa que la seguridad social ha sido objeto de una configuración compleja: en primer lugar, según lo establece el inciso 1° del artículo 48 superior, constituye un "servicio público de carácter obligatorio". De acuerdo a esta disposición al Estado le corresponde una importante labor en su realización dado que el texto superior le confía las correspondientes labores de dirección, coordinación y control; actividades que deben ser realizadas con estricta observancia de los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia⁵. Adicionalmente, en la dirección sugerida por el artículo 48 superior, el Congreso estableció en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993 que la seguridad social constituye un "servicio público esencial" en lo relativo a los subsistemas de salud y pensiones, precisando que en este último sólo gozan de tal caracterización aquellas actividades relacionadas con el reconocimiento y pago de mesadas. Dicha consagración supone un considerable incremento en la responsabilidad que resulta exigible al Estado y a todas las entidades que participan en el sistema de seguridad social, dado que las exigencias de permanencia y continuidad del servicio se convierten en deberes inexcusables, lo cual coincide con el propósito general que inspira la Ley de seguridad social.

De otra parte los artículos 53 y 83 de la C.Pol. son también fundamentos de esta demanda, que a la letra disponen:

"ARTÍCULO 53. El congreso expedirá el estatuto del trabajo. La Ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
(...) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho;(...)"

"ARTÍCULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."

De igual forma, son aplicables al sub-judice las siguientes disposiciones de carácter legal:

➤ LEY 100 DE 1993

ARTÍCULO 36.- "Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley."

⁴ Sentencias C-514 de 1992, C-735 de 2000, C-623 de 2004, C-111 de 2006, T-596 de 2006, C-125 de 2000, C-835 de 2003, C-516 de 2004, SU480 de 1997, entre otras.

⁵ Según fue establecido en sentencia C-623 de 2004, la seguridad social, no sólo debido a las disposiciones superiores que así lo precisan sino a su naturaleza conceptual, es un servicio público en la medida en que se ajusta a los linderos que el derecho administrativo y el derecho constitucional han trazado para deducir tal característica de determinadas actividades desarrolladas por el Estado. En tal sentido, la seguridad social se ciñe a los lineamientos que han servido como parámetro definitivo de los servicios públicos, tal como se explica a continuación: (i) En primer término, constituye una actividad dirigida a la satisfacción de necesidades de carácter general, la cual se realiza de manera continua y obligatoria; (ii) en segundo lugar, dicha labor se presta de acuerdo a disposiciones de derecho público; (iii) para terminar, es una actividad que corre a cargo del Estado, el cual puede prestar el servicio directamente o por medio de concesionarios, administradores delegados o personas privadas.

ARTICULO. 151.- Vigencia del sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones previsto en la presente ley, regirá a partir del 1° de abril de 1994. No obstante, el gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras de los fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones contempladas en la presente ley, a partir de la vigencia de la misma.

PARAGRAFO. -El sistema general de pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental.

El legislador de 1993 consciente de los cambios producidos por el tránsito legislativo, que podían afectar a quienes si bien no habían adquirido el derecho a la pensión por no haber cumplido los requisitos para ello, tenían una expectativa legítima de adquirir ese derecho por estar próximos a cumplir las condiciones para pensionarse, creó en el Inciso segundo del Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, un régimen de transición consistente en respetar el régimen anterior, los requisitos de **edad, tiempo de servicios y monto de la pensión** a favor de tres categorías de trabajadores, que al momento de entrar en vigencia el Nuevo Sistema General de Pensiones cumplieran determinados requisitos. Tales categorías de trabajadores son:

- Hombres con 40 años o más de edad.
- Mujeres con 35 o más años de edad.
- Hombres y mujeres que independientemente de la edad tuvieran 15 años o más de servicios o semanas cotizadas.

Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva Ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.

Lo anterior conduce a afirmar, que mi poderdante, la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA** es beneficiaria del Régimen de Transición y por ende titular de un Derecho adquirido, al cumplir con los parámetros dispuestos en el artículo 36 de la Ley 100, por tal razón se le debe garantizar y respetar en su integridad, por estar dentro de su patrimonio inmaterial.

ARTICULO. 272.- Aplicación preferencial. El sistema integral de seguridad social establecido en la presente ley, no tendrá, en ningún caso, aplicación cuando menoscabe la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores.

En tal sentido, los principios mínimos fundamentales consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política tendrán plena validez y eficacia.

ARTICULO 288 LEY 100 DE 1993.- "Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley y en las Leyes anteriores. Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en Leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley."

➤ **LEY 33 DE 1985 – LEY 62 DE 1985 Y DECRETO 1045 DE 1978**

ARTÍCULO 1 LEY 33 DE 1985: "El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
(...)"

PARAGRAFO 2° ARTICULO 1 LEY 33 DE 1985. (...) "Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta años (50) de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55) si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro."

Artículo 3°. Modificado por la Ley 62 de 1985. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes.

ARTÍCULO 45 DECRETO 1045 DE 1978. DE LOS FACTORES DE SALARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CESANTÍA Y PENSIONES. Para efecto del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieron derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrán en cuenta los siguientes factores de salario:

- La asignación básica mensual.
- Los gastos de representación y la prima técnica.
- Los dominicales y feriados.
- Las horas extras.
- Los auxilios de alimentación y transporte.
- La prima de navidad.
- La bonificación por servicios prestados.
- La prima de servicios.
- Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio.
- Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al decreto Ley 710 de 1978.
- La prima de vacaciones.
- El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio.
- Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inexecutabilidad del artículo 38 del decreto 3130 de 1968, durante dicho tiempo.

CONCEPTO DE VIOLACIÓN - CASO CONCRETO

En síntesis, la procedencia de la **RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE VEJEZ** a favor de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**, obedece a situaciones de índole constitucional y legal, que está desconociendo la entidad demandada en sus actos administrativos, inicialmente por el hecho de ser beneficiaria del Régimen de Transición contemplado en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que implica reconocer a su favor la normatividad que le resulte más favorable, no sólo en cuanto a la edad, tiempo de servicio y monto sino también en la forma en cómo debe liquidarse la misma, en virtud de los **PRINCIPIOS DE INESCINDIBILIDAD, IGUALDAD MATERIAL, PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES, FAVORABILIDAD EN MATERIA LABORAL Y PROGRESIVIDAD.**

Así las cosas, conforme al marco jurídico aplicable a la situación prestacional de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**, **Ley 33 de 1985** y los criterios jurisprudenciales estimados por el Honorable Consejo de Estado, es procedente y válido tener en cuenta para efecto de estimar la cuantía de la Pensión de Jubilación y/o Vejez, la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios, es decir la totalidad de las **sumas devengadas que el servidor público recibe de manera habitual y**

Plaza de Cayzedo Cra. 4 No. 11-33, Edificio Ulpiano Lloreda Oficina 801-
802, Teléfono: 882 5920 Celular: 315 791 1569 - 300 811 5452

www.pensionescali.com

Cali - Valle

periódica como contraprestación directa por los servicios prestados, tales como asignación básica, primas de navidad, servicios y vacaciones, bonificaciones, auxilios, subsidios, horas extras y recargos de todo tipo, incrementos por antigüedad, quinquenios y en general cualquier otro emolumento que se pague como retribución por sus servicios, independiente de la denominación que se le dé, pues el señalamiento de esos conceptos previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y Ley 33 y 62 de 1985, se hacen solo en forma enunciativa o ilustrativa

Que el **Honorable Consejo de Estado en Sentencia de Unificación de la Sección Segunda Sala Plena, Radicación número: 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09) del 04 de Agosto de 2010. C.P. VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, recogió su línea jurisprudencial** y definió que la pensión de jubilación de servidores públicos beneficiarios del régimen de transición debe tener en cuenta la inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicios, por cuanto una Interpretación taxativa vulnera el principio de progresividad, Principio de igualdad y Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, al respecto dispuso:

En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que **la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios. Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, que al analizar la interpretación que debía otorgarse al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma anterior que enuncia los factores salariales que deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar las cesantías y las pensiones, - de quienes se les aplica la Ley 6 de 1945. De la normatividad anterior a la expedición de la Ley 33 de 1985, tal como ocurre en el caso del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, se observa que los factores salariales que debían tenerse en cuenta para efectos de determinar la cuantía de la pensión de jubilación eran superiores a los ahora enlistados por la primera de las citadas normas, modificada por la Ley 62 de 1985; aun así, también de dicho Decreto se ha predicado que no incluye una lista taxativa sino meramente enunciativa de los factores que componen la base de liquidación pensional, permitiendo incluir otros que también fueron devengados por el trabajador. La Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo año, en el sentido de considerar que aquella enumera en forma expresa y taxativa los factores sobre los cuales se calcula el Ingreso Base de Liquidación de la pensión de jubilación, trae como consecuencia la regresividad en los Derechos Sociales de los ciudadanos, pues se observa sin duda alguna que el transcurso del tiempo ha implicado una manifiesta disminución en los beneficios alcanzados con anterioridad en el ámbito del reconocimiento y pago de las pensiones.**

Traer a colación el criterio jurisprudencial expuesto en la sentencia de unificación de fecha 04 de agosto de 2010, aclara el panorama frente a la liquidación de la pensión de jubilación cuando el marco normativo es el contenido en la Ley 33 de 1985, definiendo de una vez por todas que la base para liquidar la prestación está constituida **por todos los factores salariales que se devengaron durante el último año de servicios de manera habitual y periódica como contraprestación directa por los servicios, independientemente de la denominación que se les dé**. Por tanto, el listado de factores

establecidos en el artículo 3° de la referida Ley, modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, no es taxativo, tal como lo enunció el H. Consejo de Estado, sino meramente enunciativo, garantizando de esta manera los principios de igualdad material, progresividad, primacía de la realidad sobre las formas y favorabilidad en materia laboral.

Que dicha Sentencia de Unificación ha venido siendo reiterada entre otras en las siguientes sentencias:

- CONSEJO DE ESTADO, Radicado No. 201818266001-23-31-000-2006-00494-011649-07, fecha: 05/08/2010, SECCION SEGUNDA, C.P. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO, ACTOR: JOSE NORBEY GALVIS PELAEZ DEMANDADO: MINISTERIO DE EDUCACION - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.
- CONSEJO DE ESTADO, SECCION SEGUNDA, Radicado No. 200697076001-23-31-000-2006-02053-01 (0448-10), FECHA: 10/02/2011, C.P. GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN, ACTOR: HELENA MARGARITA TAPIA DE ARTEAGA, DEMANDADO: CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL EICE EN LIQUIDACION.
- CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION SEGUNDA, SUBSECCION B, Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE, Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil doce (2012), Radicación número: 25000-23-25-000-2008-00863-01(1494-09) Actor: CARLOS ARTURO BOGOTA VARGAS, Demandado: FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP.
- CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION SEGUNDA, SUBSECCION "B", Consejera ponente: BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ, Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil doce (2012). Radicación número: 15001-23-31-000-2008-00188-01(1505-11) Actor: LUIS MARIA JIMENEZ OCHOA, Demandado: CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL.
- CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, Consejero ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, Bogotá D. C., veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013), Radicación número: 76001-23-31-000-2007-00217-01(0341-12), Actor: JOSÉ OMAR GONZÁLEZ CRUZ, Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES
- CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION "B" Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce (2014).- Radicación número: 25000-23-25-000-2006-08455-01(1420-11) Actor: RUTH AMAYA DE PRIETO Demandado: INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL.
- CONSEJO DE ESTADO, SECCION SEGUNDA, Radicado No.: 207316325000-23-25-000-2010-00811-01 (0726-13), FECHA: 08/05/2014, C.P. GERARDO ARENAS MONSALVE, ACTOR: EDUARDO APARICIO AHOAGADO LARA, DEMANDADO: CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL.
- CONSEJO DE ESTADO, SECCION SEGUNDA SUBSECCION A Radicado No.: 207584625000-23-25-000-2006-08381-011152-09, FECHA: 09/04/2014, C.P.: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN, ACTOR: DARIO DURAN RESTREPO, DEMANDADO: FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA - FONPRECON.

Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de LEILA FABIOLA GUEVARA vs COLPENSIONES, Página 13 de 18.

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN "B", C.P.: ALFONSO VARGAS RINCON, del (9) de febrero de dos mil quince (2015), Radicación número: 520012333000201300003 01 (0011-2014), Actor: JAIME HERNANDO LASSO MEDINA, Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - U.G.P.P.

Que la posición sostenida por la Corte Constitucional en **Sentencia SU230 de 2015**, para negar el Derecho a la reliquidación bajo las previsiones de la Ley 33 de 1985, en lo que hace referencia al IBL, es violatoria de los principios de favorabilidad, igualdad e inescindibilidad e integralidad de la norma, incluso viola el mandato contenido en el ARTICULO 272 de la Ley 100 de 1993 que indica que ésta (Ley 100 de 1993) no tendrá aplicación cuando menoscaben los derechos de los trabajadores caso en el cual se aplicaran los principios constitucionales (art. 53 C.Pol), lo que significa que aterrizando al caso concreto, **NO DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 21 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100, QUE REGULAN EL IBL, PORQUE DESMEJORARÍA SU DERECHO PENSIONAL, CASO EN EL CUAL Y TAL COMO LO INFORMA LA NORMA (art. 272) DEBE PRIVILEGIARSE LOS PRINCIPIOS MÍNIMOS FUNDAMENTALES CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 53 DE LA C.POL DENTRO DE LOS CUALES POR SUPUESTO ENCAJA EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, QUE "consiste en la obligación de todo servidor público de optar por la situación más favorable al empleado, en caso de duda en la aplicación e interpretación jurídica"**⁶ y que en el caso de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA** se haría efectivo otorgando su pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, por serle más favorable.

De manera que siguiendo la línea sólida y unificada que ha venido sosteniendo el H. Consejo de Estado, respetuosa y acorde con los derechos fundamentales y principios constitucionales que en todo caso deben prevalecer en el ordenamiento jurídico colombiano en un Estado social de Derecho, debe darse una **APLICACIÓN INTEGRAL** de la Ley 33 de 1985, cuando se es beneficiario del régimen de transición y se cumplen los requisitos de la norma, pero no sólo en lo que hace referencia a edad, tiempo de servicio y monto sino en cuanto a la forma de liquidación (IBL), y ello por cuanto es la interpretación que más se atempera al principio de favorabilidad, igualdad e inescindibilidad de las leyes, en virtud del cual, la norma que se adopte debe ser aplicada en su integridad quedando prohibido, dentro de una sana hermenéutica, el desmembramiento de las normas legales que regulan la misma situación de hecho, de forma que no se puede tomar una parte de la Ley 33, y otra de la Ley 100 para efectos de la concesión de un derecho pensional, y menos hacer el desmembramiento en perjuicio del pensionado, ello sería tanto como contravenir la finalidad de crear un régimen de transición, que no es otra que otorgarle ciertos beneficios a quienes por sus especiales condiciones de edad o tiempo de servicio merecían conservar un régimen al que venían afiliado y que significaba mejores condiciones que el nuevo Sistema General.

⁶ Sentencia T-559/11.

De otra parte, es preciso recalcar que por mandato legal, el artículo 10 del CPACA le ordena o mejor le impone el **deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia**: "Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas." En concordancia con la sentencia C-634 de 2011 determina la obligatoriedad de las autoridades de aplicar las sentencias de unificación del Consejo de Estado en casos en los que se discuten supuestos facticos similares, por lo que insistir de manera arbitraria en la negativa es una atentando a los derechos pensionales de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**.

Así las cosas, al no acceder la Entidad demandada a la reliquidación de la Pensión de Vejez de mi poderdante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 con la inclusión de la totalidad de los factores salariales realmente percibidos en el último año de servicio, cercena a la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA** la posibilidad de tener acceso a mecanismos de protección para que los cambios normativos debidos al tránsito legislativo en materia pensional no afecten desmesuradamente sus intereses prestacionales, y la pone en una situación de desequilibrio frente a otros, que en idénticas condiciones le han concedido el derecho, pues aunque al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones no se había estructurado a su favor el estatus pensional, tenía una expectativa legítima de adquirir el derecho en las condiciones que le sean más favorables, situación que se consolidó en el año 2007, fecha en la que cumplió con 55 años de edad y más de 20 años de servicio público.

Ahora la desafortunada **Sentencia de Unificación SU230 de 2015, no dispuso de manera expresa su aplicación retroactiva**, de manera que sus efectos son hacia el futuro y no debe modificar las situaciones jurídicas que se consolidaron antes de su expedición, en aras de preservar la seguridad jurídica del ordenamiento normativo; ahora en el caso de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**, su situación jurídica se consolidó desde el 02 de Enero de 2004, fecha para la que cumplió los requisitos de tiempo y edad, es decir mucho antes de la expedición de la sentencia de la Corte Constitucional SU-230 DE 2015, (29 de abril de 2015).

De otra parte, es de suprema importancia resaltar que el Consejo de Estado, ya tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto, con ocasión de un caso de supuestos facticos similares al presente, en el que se invoca la aplicación integral de la Ley 33 de 1985, mediante **SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, C.P. GERARDO ARENAS MONSALVE, de fecha 25 de FEBRERO DE 2016, Referencia: 4683-2013**, caso en el que estudio el pronunciamiento de la Corte Constitucional, **sentencia SU-230 de 2015**, y REITERÓ LA POSICIÓN QUE HA VENIDO SOSTENIENDO DURANTE 20 AÑOS EN TORNO A LA LIQUIDACIÓN DE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON REGIMEN DE TRANSICIÓN, TENIENDO EN CUENTA LA TOTALIDAD DE FACTORES SALARIALES DEVENGADOS EN EL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS, CON BASE EN LEY 33 DE 1985, así textualmente expreso la HONORABLE Y VEHEMENTE CORPORACIÓN:

"La Sala no puede pasar por alto que al momento de resolverse el presente recurso se dio a conocer por parte de la Corte Constitucional el contenido total de la **Sentencia SU-230 de 2015**, en la cual abordó el tema de régimen de transición y señaló como precedente en materia de ingreso base de liquidación de las pensiones del régimen de transición, lo dicho por esa misma Corte en la sentencia C-258 de 2013. A continuación procede la Sala de la Sección Segunda del Consejo de Estado a fijar su posición con respecto a la referida sentencia de la Corte Constitucional."

"Quiere en esta oportunidad el Consejo de Estado señalar que, de conformidad con lo expuesto y como se expresó con anterioridad en esta providencia, el criterio invariable de esta Corporación, sostenido en forma unánime por más de veinte años, ha sido y es que el monto de las pensiones del régimen de transición pensional del sector oficial comprende la base (generalmente el ingreso salarial del último año de servicios) y el porcentaje dispuesto legalmente (que es por regla general el 75%). La única excepción a este criterio la constituyen las pensiones de Congresistas y asimilados, regidas por la Ley 4ª de 1992, en virtud de la cosa juzgada constitucional establecida en la sentencia C-258 de 2013, pues conforme a la parte resolutoria de la referida sentencia de control constitucional, "las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL), aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso".

Quiere insistir el Consejo de Estado en las razones que sustentan su postura tradicional con respecto al ingreso base de las pensiones del régimen de transición, y que ahora reitera:

- 1) La complejidad de los regímenes especiales pensionales, aplicables en virtud del régimen de transición, hace altamente razonable la interpretación que tradicionalmente ha tenido esta Corporación respecto de la expresión "monto" contenida como criterio general en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
- 2) Esta interpretación ha sido comparada en múltiples sentencias de constitucionalidad y de tutela de la Corte Constitucional, por lo cual el Consejo de Estado la ha aplicado en forma reiterada y pacífica. La interpretación que pretende introducir la sentencia SU-230 de 2015, si se acogiera por el Consejo de Estado, afectaría el derecho a la igualdad de los ciudadanos beneficiarios del régimen de transición que tienen sus pensiones pendientes de decisiones judiciales o administrativas, y que constituyen un número significativo de quienes se han beneficiado de la forma tradicional de liquidación, dada la inminente finalización del régimen de transición pensional. El principio constitucional de igualdad, en este caso se vería seriamente afectado en un aspecto cardinal de los derechos sociales como lo son las pensiones. Igual reflexión cabría sobre el impacto económico, que en todo caso ya se asumió para la generalidad de los pensionados, quedando muy pocos pendientes de esa decisión. Debe recordarse que el Acto Legislativo No. 1 de 2005, además de introducir el concepto de sostenibilidad financiera al sistema pensional, dispuso que el Estado "asumirá la deuda pensional que esté a su cargo".
- 3) Los serios argumentos de desigualdad económica y social que sustentaron las decisiones de la sentencia C-258 de 2013, incluido el relativo al ingreso base de liquidación de las pensiones del régimen cuya constitucionalidad se definió en esa oportunidad, no pueden extenderse a las demás pensiones de los regímenes especiales del sector público que no tienen las características de excepcionales ni privilegiadas.
- 4) La Corte Constitucional no ha rechazado la postura del Consejo de Estado en este punto en forma expresa, en acciones de tutela en las que esta Corporación haya sido accionada, por lo cual la sentencia SU-230 de 2015 no le sería aplicable, dado que como tribunal supremo de lo contencioso administrativo, debería tener derecho, como mínimo a defender su posición en tales acciones. Cuando tal cosa suceda, es de esperar que la Corte Constitucional examine los argumentos aquí expuestos y debata a su interior el alcance de los mismos antes de pronunciarse sobre este importante tema.
- 5) Los principios de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, que la misma Corte Constitucional ha estimado incorporados a la Constitución Política colombiana en virtud del llamado "bloqueo de constitucionalidad", no se predicar exclusivamente de los cambios legales sino también de las variaciones jurisprudenciales. Si la interpretación tradicional del Consejo de Estado sobre el concepto de "monto" en las pensiones del régimen de transición del sector público se ha aplicado a la generalidad de los pensionados de dicho sector, tanto en sede administrativa como en las decisiones

judiciales, y esa interpretación ha sido compartida por la Corte Constitucional en sentencias de constitucionalidad y de tutela, no parece acorde con los referidos principios de progresividad y no regresividad el cambio jurisprudencial que se pretende introducir con la sentencia SU-230 de 2015.

En efecto, si ya la Constitución dispuso la finalización del régimen de transición pensional y queda pendiente, en consecuencia, un volumen de reconocimientos pensionales mucho menor que el que ya tiene decidido el asunto conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, no se ve ninguna afectación del principio de sostenibilidad financiera que imponga el cambio jurisprudencial que plantea la sentencia SU-230 de 2015, y en cambio sí se hace notorio y protuberante el desconocimiento de los principios de igualdad y de progresividad."

De otra parte no sobra recordar que esta disyuntiva entre el precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional y el H. Consejo de Estado, ha sido dirimido ya incluso por la **Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo**, entidades que en **Circular Conjunta 004 del 12 de abril de 2016**, impartieron instrucciones las entidades encargadas del reconocimiento de pensiones de empleador públicos para que aplicaran de manera preferente y obligatoria por ser la jurisdicción natural de los empleados públicos el precedente fijado por el Consejo de Estado so pena de responsabilidades disciplinaria y fiscales.

Corolario les solicitó se de aplicación a los principios del derecho del trabajo y la seguridad social (art. 53 C.Pol. y 21 CST), esto es, principio de favorabilidad, pro-homine, inescindibilidad, integralidad de la norma, aplicación preferencial de la Ley 33 de 1985 en virtud del artículo 272 de la Ley 100 de 1993 e IGUALDAD, para que en virtud de ello y la jurisprudencia del Máximo órgano de lo Contencioso Administrativo, se conceda a favor de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA** la reliquidación de su Pensión de Vejez en los términos de la Ley 33 de 1985.

Bastan los anteriores argumentos para edificar la solicitud de **NULIDAD** de los Actos Administrativos que negaron el reconocimiento y pago de la Pensión de Jubilación de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA** conforme al marco prestacional definido por la Ley 33 de 1985, y en su lugar se Reliquide la Pensión de Jubilación que viene percibiendo mi representada con base en el promedio de la totalidad de factores salariales devengado en el último año de servicio, que lo constituye el lapso comprendido entre el **1° de Julio de 2004 y el 30 de Junio de 2005**, conforme lo certificó la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN SECCIONAL TULÚA**.

V. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

La cuantía de la acción, la estimo en **TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$33.801.458) MCTE**, es decir, NO supera los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, discriminados así:

Año	Valor Mesada Pensional actual	Valor Mesada Reliquidada – Último año de servicio	Diferencia Pensional	No. Mesadas	Total adeudado
2013	\$ 1.593.113,07	\$ 2.357.509,76	\$764.396	05	\$3.821.980
2014	\$ 1.624.019,47	\$ 2.403.245,45	\$779.226	14	\$10.909.164

Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de LEILA FABIOLA GUEVARA vs COLPENSIONES, Página 17 de 18.

2015	\$ 1.683.458,58	\$ 2.491.204,24	\$807.746	14	\$11.308.444
2016	\$ 1.797.428,73	\$ 2.659.858,76	\$862.430	09	\$7.761.870
					\$33.801.458

Lo anterior con base en la diferencia pensional que resulta entre la prestación inicialmente reconocida y la que a través de esta acción se solicita, actualizada con base en el IPC, multiplicada por el número de meses adeudados a la fecha de presentación de la demanda, sin que exceda de tres años, de conformidad con el artículo 157 inciso final del CPACA.

VI. PRUEBAS

Respetuosamente le solicito a su Señoría se sirva decretar las siguientes probanzas:

DOCUMENTALES:

1. Registro Civil de Nacimiento de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**.
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**.
3. Medio Magnético del expediente Administrativo suministrado por **COLPENSIONES** con oficio remisario del 09 de Agosto de 2016.
4. Certificado de Factores Salariales del último año de servicio, suscrito por Jefe de División de Gestión Administrativa y Financiera de la DIAN Tuluá (V) Dra. **VICTORIA EUGENIA OVIEDO ARIAS** de fecha 22 de Enero de 2015.
5. Formatos CLEBP No. 3b otorgados por la DIAN a favor de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**.
6. Resolución No. 04112 del 25 de Mayo de 2005 que retiro del servicio a la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**.
7. Resolución No. 006881 del 09 de Julio de 2003, por medio de la cual el extinto **INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL VALLE**, reconoció una pensión de vejez a favor de la señora **LEILA FABIOLA GUEVARA**.
8. Resolución No. 013321 del 17 de Noviembre de 2004, en la que el **INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL**, resolvió modificar la Resolución No. 006881 del 09 de Julio de 2003.
9. Resolución No. 08910 del 20 de Junio de 2005, en la que el **INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL SECCIONAL VALLE**, resolvió un recurso de reposición y Modificó la Resolución No. 006881 del 09 de Julio de 2003 y la Resolución No. 013321 del 17 de Noviembre de 2004.
10. Resolución No. 901270 del 19 de octubre de 2005 en la que el **ISS VALLE DEL CAUCA**, resolvió recurso de apelación y modificó nuevamente las Resoluciones No. 013321 del 17 de Noviembre de 2004 y 08910 del 20 de Junio de 2005.
11. Solicitud de Reliquidación Ley 33 de 1985 radicada el 12 de Marzo de 2015 en **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**.
12. Resolución No. GNR 275018 del 08 de septiembre de 2015, que resolvió la solicitud de reliquidación.
13. Recurso de Apelación radicado el día 1º de Octubre de 2015, en **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, en contra de la Resolución No. GNR 275018 del 08 de septiembre de 2015.

Plaza de Cayzedo Cra. 4 No. 11-33, Edificio Ulpiano Lloreda Oficina 801-802, Teléfono: 882 5920 Celular: 315 791 1569 - 300 811 5452

www.pensionescali.com

Cali - Valle

- 14.** Resolución No. VPB 73414 del 07 de Diciembre de 2015, en la que LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, desató el recurso de apelación y resolvió confirmar la Resolución No. GNR 275018 del 08 de septiembre de 2015.
- 15.** Poder para actuar, Copia de la cédula de ciudadanía y Tarjeta Profesional del suscrito.

VII. ANEXOS

1. Los enunciados en el acápite de pruebas.
2. Copias de la demanda y sus anexos para el traslado a la Entidad demandada, para el Señor(a) Agente del Ministerio Público delegado para estos asuntos y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado.
3. Copia de la Demanda para el archivo del Despacho.
4. Copia en medio magnético de la demanda.

VIII. COMPETENCIA

En razón a que la cuantía de la acción No supera los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes de conformidad con el numeral 2° del artículo 152 del CPACA, el domicilio del demandante y lugar donde se agotó la reclamación administrativa de conformidad con el numeral 2 del artículo 156 del CPACA, es usted competente Señor(a) Juez(a) para conocer del asunto en primera instancia.

IX. NOTIFICACIONES


DEMANDANTE: La señora **LEILA FABIOLA GUEVARA** en la carrera 32ª No. 25-44 Barrio Alvernia del Municipio de Tuluá (V), teléfono: 2323313.

DEMANDADA: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, en la Carrera 10 No. 72 - 33 Torre B Piso 11 de la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 489 09 09, en la ciudad de Buga, en la calle 4 No. 18-81 y/o en el correo electrónico: notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co.

A la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la calle 70 No. 4 - 60 de la ciudad de Bogotá D.C. y/o en el correo electrónico buzonjudicial@defensoriajuridica.gov.co y/o procesos@defensajuridica.gov.co

AL SUSCRITO: en mi oficina profesional ubicada en la Carrera 4 No. 11-33 Plaza de Cayzedo, Edificio Ulpiano Lloreda Oficina 801-802 de esta ciudad, teléfono: 882 5920, celular: 315 791 1569 - 300 811 5452 y en el correo electrónico: yojanier@hotmail.com.

Del Señor(a) Juez(a) atentamente y con el respeto acostumbrado,


YOJANIER GÓMEZ MESA
C.C. 7.696.932 de Neiva - Huila
T.P. 187.379 del C. S. de la J.
P/Smhc

